

143-PR-00186

ENT: Bueno, buenos días, hoy estamos a jueves -- ----- 2019 y agradecemos, eh, la participación de TEST que muy amablemente decidió concederle una entrevista a profundidad a la Comisión de la Verdad para portar elementos de análisis al núcleo 5 sobre despojo de tierras y desplazamiento forzado, TEST muchísimas gracias

TEST: Vale Ivone gracias a ti, gracias por convocarme a esta entrevista, cuentas con mi conocimiento y experiencia para poder proporcionar algunas reflexiones e información que ustedes necesiten en el núcleo.

ENT: Listo, TEST, el primer digamos, la primera pregunta que nos gustaría que nos ayude a, digamos, a analizar sobre la implementación del punto 1 del acuerdo de paz que prometió una Reforma Rural Integral, cuando el gobierno reconoce que, pues, no lo ha hecho desde que lo prometido es los 60, los informes Kroc que hacen seguimiento a la implementación, han advertido, que esa implementación va a paso muy lento y qué habido muchos obstáculos relacionados con distintos temas, algunos con sobre voluntad política, articulación institucional, choque políticas públicas, el tema del catastro, eh, bajo tu experiencia y tu análisis cuáles crees que han sido sus principales obstáculos que han impedido que la reforma rural integral prometida en el acuerdo, se logre.

TEST: Sí, eh, yo empezaría por decirte que, la Reforma Rural Integral contenida en el punto 1 del acuerdo sorpresivamente para mí, en mi experiencia, en el trabajo que yo he tenido en territorio, ha contado con un enorme respaldo y de una enorme intencionalidad de las poblaciones, de las comunidades, de las organizaciones sociales de base, por conseguir la implementación y digo sorprendente, porque pues durante todas estas décadas de conflicto el nivel de desconfianza frente a las instituciones que se ha alimentado en el país es enorme y que las organizaciones participarán de la manera en que lo han hecho en varias de las estrategias contenidas en el punto 1 especialmente en el punto 11, pues no dejan de sorprender y no dejan de dar una lección de nobleza frente a lo que es la construcción de una apuesta de paz territorial, dicho eso yo pasaría por la segunda reflexión y es que en este país el concepto de paz territorial depende del actor que lo construyen o que se lo piense y creo que ahí hay una importante, un importante factor para lo que está haciendo el proceso de implementación, entonces la pregunta es que han entendido las autoridades a cargo de la implementación, qué significa paz territorial, cómo entienden las autoridades a cargo de la implementación que se compone la paz territorial, si ponen en una balanza horizontal a todos los actores, eso significaría que todos los que hacen parte del territorio o tienen interés en el territorio tendrían que construir esa visión de paz territorial, o si pasa por la comprensión de que existen unas desigualdades estructurales donde algunos de esos actores deberían

tener preponderancia en la definición de lo que ellos consideran debe ser la construcción de paz en sus territorios y para qué, paz para qué en los territorios y creo que hay una atención que ha estado presente desde la administración que impulsó la suscripción del acuerdo, es decir, la administración Santos y la administración Duque que ha tenido a su cargo implementarla, pues después de su arribo a la presidencia, entonces, primero pasa por entender, o lo que yo he visto es que, si bien desde las autoridades y desde el gobierno por supuesto tienen que estar todos los actores presentes, incluidos por ejemplo, los actores económicos sobre los que se quiere generar una buena voluntad para participar en el proceso y eso implica, invitarlos a participar de esa construcción a partir una suerte de incentivos adicionales a los que ya han tenido históricamente en el país, pero también pasa por lo que las autoridades que representan ciertos proyectos políticos quisieran que fuese lo que se consolida en esos territorios y también pues identificando cuáles son los proyectos que ellos no quisieran que adquirirán fuerza en los territorios, entonces bajo esa primera visión uno diría que además de que no es homogéneo, entre los representantes de una administración y la otra, si hay una fuerte intencionalidad porque esa construcción de territorio incluye actores que incluso han buscado la desnaturalización de los territorios como las comunidades lo han conocido. Pero y por el otro lado están sorprendentemente las organizaciones sociales de base, no solamente apostándole a confiar en las instituciones, a apostarle a la implementación de las herramientas contenidas en el acuerdo de paz, pero también apostándole a que sus visiones territoriales se posicionen a través de esas herramientas, buscando desde la creatividad, desde la correlación de fuerzas, desde la búsqueda de otras figuras para asegurar su permanencia en los territorios, pero una permanencia que vuelque la atención sobre el tipo de relaciones que ellos han establecido con esa tierra y que buscan que pervivan en esa tierra que, sobrevivan incluso después de todos los embates que han recibido de la violencia, de la institucionalidad, de las políticas que son o que han sido excluyentes en esos territorios y creo que ahí, por un lado hubo una sorprendente de mi parte una, una posición que hoy encuentro absolutamente admirable en la construcción de sus instrumentos, por ejemplo lo que fue la participación de esos procesos en lo que hoy son los PATRS y el proceso PDET [Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial] es impresionante las organizaciones como se volcaron pece a metodologías altamente cuestionables a construir una visión territorial, a insistir no solamente con una lista de necesidades en qué es lo que el estado no ha aportado en esos territorios sino a qué deben dirigirse los esfuerzos de los actores en lo local para construir territorio desde un desarrollo que no sea un desarrollo excluyente, inequitativo, un desarrollo, qué, que pase por la destrucción del territorio, sino todo lo contrario, entonces a mí en lo personal, me sorprende lo que surgió en esos procesos, pero también encuentro que uno de los obstáculos ha

sido que, lo que surgió en esos procesos, no necesariamente se corresponde con lo que las autoridades esperaban que fuera esos instrumentos, y ahí empieza a ver pues una oportunidad para empezar a crear los obstáculos en la implementación de lo que surgieron, por ejemplo, en los instrumentos contenidos en el punto 1 específicamente PDET y los PATRS para implementar esos PDET, entonces, eso sería a mi juicio un elemento transversal como para entender cuáles pueden ser algunos de los factores que han frenado la implementación, las visiones de territorio siguen siendo disímiles, sigue existiendo una enorme diferencia pero en este país sigue habiendo una enorme resistencia a construir un país en el que quepan muchos, no, este sueño de un mundo en el que quepan muchos mundos no, no no es rotar una posición con fuerza o con extinción sino darle lugar al pluralismo, la diferencia eso ha sido de enorme dificultad en Colombia y en esta oportunidad esta oportunidad no es ajena a eso, entonces ante estas distintas visiones de que quieren ser los territorios que en sí mismo ya Incluso en las organizaciones de base no es uniforme tampoco es bastante heterogénea, pero que es aún más opuesta a la visión que siguen promoviendo las autoridades con capacidad de decisión en políticas públicas que no necesariamente son autoridades locales y autoridades del orden nacional centralista, no, ahí hay una enorme tensión que imposibilita una implementación de cosas incluso construidas de forma participativa con la gente, segundo creo que tenemos un problema, a mi juicio es un problema estructural, no creo que eso no haya sido advertido por quienes suscriben el acuerdo, ni quiénes hemos participado desde la sociedad civil a la construcción de paz, pero porque está ahí y es que nosotros hemos querido resolver un problema que es estructural, a la inadecuada consolidación de este estado y que ha atravesado el conflicto a través de mecanismos transicionales, como es el tema de la tierra, entonces nosotros hemos querido darle una respuesta al problema la tierra desde una apuesta, un paraguas transicional, pero este es un problema que requiere una respuesta no transicional y sin duda haberlo buscado desde lo transicional es un paso, pero allí no encontraremos una solución a largo plazo, duradera, sostenible para un problema que ha estado desde la constitución de la República y digamos allí radica otra enorme dificultad para poder implementar siquiera lo pactado, como, hacer una ordenamiento participativo de los usos del suelo, ese es un elemento que ha estado en el corazón de los conflictos socioambientales en el país, no solamente que hacer en el territorio y para qué el territorio, sino como asegurarse que lo que se va hacer en el territorio tiene una racionalidad, tiene una visión generacional, tiene, se inspira sobre el respeto un conjunto de principios que además están orientados al logro en los objetivos no cortoplacista, sino a largo plazo que es como lo que inspira una planeación o un diseño de ordenamiento territorial no, y cuando nos planteamos que, que además el tema de acceso a la tierra es una tarea que se va a ser en el marco de un instrumento que da una respuesta un conflicto, sí, y que por lo tanto pues es eso, es una transición para la superación de ese episodio de violencia

o de no funcionamiento del Estado hacia como un puente a el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no. Pero cuando nos encontramos con que esos problemas que estaban ahí presentes desde el nacimiento de la República han sido tan altamente normalizados, pues nos encontramos con enorme resistencias para que ese modelo cambie, entonces tenemos una respuesta o planteamos en el en el instrumento del acuerdo, una respuesta, que es una respuesta a los mínimos básicos de una sociedad democrática en temas de tierras, si, una sociedad que le apuesta a reconocer que tiene un alto proceso de acumulación de la tierra, que esa acumulación lleva a una estructuración de una desigualdad estructural, perdón, a la consolidación de una desigualdad estructural, multidimensional no que hemos naturalizado llamando pobreza, pero eso es desigualdad eso es falta de acceso y disfrute en igualdad de condiciones de todos los derechos reconocidos en la constitución política del país, en los instrumentos internacionales firmados desde ese fetichismo legal y el formalismo por Colombia, no, y entonces cuándo nos damos cuenta que esas, esas herramientas son para constituir los básicos, los mínimos, pues también debemos entender que esos mínimos, esos mínimos hemos sido resistentes en este país, a esos mínimos llegamos entre otras no solamente por reivindicaciones de movimientos sociales, sino a partir de la búsqueda de revertir ese modelo Incluso en medio de una guerra. Y el modelo que hoy existe en Colombia para el acceso a la tierra, ni siquiera es un modelo que sea altamente restitutivo, tenemos una política restitución, pero no logra ser un modelo restitutivo plenamente, la restitución aun cuando se logre implementar a cabalidad en el escenario ideal, esa política diseñada por el país, ni siquiera permitiría decir que eso hace que Colombia sea más igualitario, porque el modelo previo a hacer el despojo ya era inequitativo la desigualdad se profundiza con la nueva dinámica del despojo en medio del conflicto y llevar las cosas a la situación anterior del despojo, no necesariamente garantiza que sea equitativo en el acceso a la tierra, no, entonces eso nos enfrenta a un problema y es, que la sociedad colombiana, esto puede ser digamos, abstracto, hetero, no, la sociedad colombiana se resiste al cambio, la sociedad colombiana es experta en eso, mi diagnostico digamos ahí empieza a encontrar algunas falencias, porque no sé si es porque las élites son muy fuertes o porque las élites tienen unas alianzas muy poderosas con otro tipo de élites por fuera del país pero existe una alta resistencia que efectivamente está sea una sociedad donde se supera la acumulación, tanto de poderes y medios productivos sobre la tierra, como, en el disfrute derechos entonces lo que está contenido en el punto 1 del acuerdo tiene un problema de implementación en cuanto a la sociedad colombiana se ha resistido históricamente a que haya un mayor acceso sobre la tierra, a que hay un modelo redistributivo de la tierra, porque el punto 1 ni siquiera comprende eso pero el apertura el acceso de tierra disponible a gente que lo necesita ya se percibe en Colombia como una manera de revertir la acumulación y eso es algo que en términos reales nuestra sociedad no ha trabajado de manera adecuada, si,

nosotros no hemos logrado llegar a sensibilizar sobre los efectos de esa excesiva acumulación en el país la tenemos tan naturalizada, creemos que están normal que exista ese nivel de acumulación y desposesión de derechos territoriales y de otro tipo de derechos encadenados a eso, que es realmente difícil lograr que quienes tienen la tarea de la implementación de esos puntos hagan la tarea adecuadamente, sí entonces cuando están haciendo la tarea adecuadamente se encuentran con las maquinarias políticas y económicas de los terratenientes,

no, entonces eso no es gratuito en términos de que las instituciones no reporten resultados reales, cuando las instituciones están hablando de un montón de cifras, pero un montón de cifras que no cambian las realidades locales, territoriales, uno se pregunta, pues eso qué me dicen términos de implementación, por ejemplo de esto mínimo, no, me está hablando que la sociedad se resiste justamente a permitir esos cambios y que necesitamos otro tipo de estrategias para avanzar en esa dirección porque está ahí, ahí no solamente está el logro de la implementación de un punto.

Ahí está el logro de poder avanzar

en una sociedad un poco más reconciliada que trabaja justamente frente a la idea de, no seguir alimentando la desigualdad que genera los conflictos, si nosotros fuéramos capaces de reconocer eso, no tendríamos tan naturalizado esto de "ah pero si los líderes sociales o los reclamantes de tierras los están matando es por algo", no, o eran delincuentes porque están cultivando coca, o utilizaban esa tierra quién sabe para que ahora quieren venir a sacar a los grandes empresarios a los que les debemos el desarrollo de los local, de esas tierras para entonces dárselas a un montón de pobres que no tienen capacidad productiva, no, todos esos estereotipos que no solamente están en el ciudadano de a pie que vive en las grandes urbes, no, pero que están metidas en el funcionario público que tiene que implementar esto entonces uno se encuentra con unos funcionarios absolutamente mecánicos, analizando o más bien aplicando el nuevo régimen con el que le toca a funcionar, si es ir la ley 160, sí es la ley no sé qué, sí, es el decreto 902, si, no, pero que tiene una sensibilidad acero y una comprensión acero de los conflictos y el contexto y de la historia de esos conflictos, entonces, ahí yo siento que por un lado si hay una presión muy fuerte de quienes no quieren dejar de acumular sobre esas instituciones que terminan siendo útiles a una estructura tan inequitativa como la que tenemos en el país pero también, refleja una incapacidad de de los sectores sociales por hacer visible las consecuencias reales del despojo, no, además porque estamos acostumbrados a fragmentar lo que dejó el conflicto, entonces pensamos que lo que pasó en la tierra es una cosa, la violencia sexual es otra, no, todas estas heridas nos ha costado, mucho trabajo desnormalizar, entonces yo creo que ahí hay otro factor general de, que representa una dificultad en la implementación y lo tercero yo sí creo sin duda alguna que esta administración no tiene ningún tipo de voluntad política para la

implementación esta administración está haciendo una cosa y es, hacer que su poca legitimidad no naufrague en los primeros dos años de gobierno, y la única manera de hacer eso es, dar una suerte de, hacer, participar de una suerte de compromisos que son inaplazables, una suerte de compromiso de los que no puede retirarse porque las implicaciones de retirarse de esos compromisos serían en términos políticos muy altas para un gobierno, que no goza de legitimidad, de una legitimidad arrasadora como como, como, gozaba un gobierno autoritario hace 10 años, no, porque pese a que la sociedad se resiste al cambio, digamos a los cambios estructurales, también es cierto que la sociedad colombiana de hace 10 años no es la misma a la sociedad colombiana de ahora, en términos de lectura y participación en el conflicto, no, entonces creo que este gobierno, lo que hizo fue identificar cuáles eran esos mínimos de los que no podía salirse por eso hizo una estrategia en la que a través de los tiempos 170 municipios PDET, integrara todas las otras estrategias del punto 1, le importa poco dar avances sobre los otros territorios no PDET, entonces dice voy a cumplirlos con los territorios en donde tenemos unos PATRS y en esos territorios voy a cruzar las otras estrategias del acuerdo, por eso vamos hacer una hoja única a una ruta única de implementación. Y esa ruta única implementación desnaturaliza, la posibilidad de la comprensión de una visión de territorio participativa, vuelven ese esfuerzo que movilizó a la gente, y que de alguna manera le permitió volver a confiar en la institucionalidad en una hoja de proyectos, de inversión, para quién, para los actores privados, que le ayuden a encontrar el dinero para implementar esos proyectos a cambio de un tratamiento especial, tanto en el marco de la transicionalidad, como, en la nueva apertura económica que tiene en vista este gobierno, entonces claro, por un lado la, el mecanismo de es, a mi manera de entender la, entonces la manera en la que cumpla algo del acuerdo sin perjudicarme completamente y donde digo no voy a cumplir. Sí, o sea no quedó como el que se retira del acuerdo pese a que mi posición es que el acuerdo no debería ser cumplido y por el otro lado utilizó el acuerdo para un propósito que si está dentro de la agenda priorizada del gobierno y es el re control de los territorios por parte de la fuerza pública por parte de los actores privados aliados a su política y por parte, porque no, de otras organizaciones criminales que en este momento estaban esperando la venida de un gobierno de derecha.

Entonces ahí está el otro gran obstáculo de la implementación del acuerdo y es la instrumentalización del acuerdo para un re control de los territorios por cuenta de los actores que históricamente han acumulado, despojado y desplazado en este país y frente a ese tercer obstáculo, yo la verdad veo que tenemos muy pocas herramientas para contrarrestar esa, esa estrategia que a mí juicio desde lo que ellos están logrando ha sido muy exitosa, la violencia contra los líderes sociales en los departamentos donde hoy está a esos niveles tan graves, está representando esos territorios que hoy para ese gobierno para esa apuesta política de país, estaban en disputa, hay otros territorios, no es que no haya

despojo donde no hay, no es que no haya desplazamiento, pero no están en disputa porque ya están absolutamente controlados, en César nosotros no estamos viendo el nivel de violencia contra líderes sociales, que vemos en Cauca y la pregunta, sería ¿por qué?, pues porque es un territorio que en este momento está bajo el dominio absoluto de un programa político de derecha, de un programa político que no siente tener en riesgo, su apuesta de acumulación no solamente sobre la tierra sino sobre el poder.

Y aquí digamos, cuando yo te digo,

siento que los caminos que tenemos para contra contrarrestar ese propósito de quiénes han querido minar las apuestas, los objetivos programáticos del acuerdo son muy pocas, porque incluso todos estamos en modo implementación, no, y cualquier avance en la implementación es ganancia sentimos pero cualquiera avance en la implementación que no contrarresta realmente las causas que nos llevaron a este conflicto en últimamente, últimas puede ser simplemente un favorecimiento a la instrumentalización del acuerdo. Entonces para mí ese es como el tercer elemento que impide una adecuada implementación de lo contenido en ese punto hay quienes y me gusta, por ejemplo, el análisis que que ofreció la procuraduría general de la nación en el informe que presentó al congreso sobre, sobre el balance a la implementación, entonces se conoce cuáles son los puntos en los que ha habido avances, no, por supuesto el avance en términos normativos está ahí dentro de eso, dentro de esos elementos enlistados no, eso no es de sorprenderse somos un país de una tradición de positivismo jurídico, a nosotros nos resulta difícil escribir artículos ponerlos en decretos, ponerlos en normas, hacer los trámites procedimentales para decir que efectivamente está siendo respetuoso con los parámetros constitucionales, pero somos un país que tiene unas enormes brechas en la implementación, incluso somos un país con enormes incapacidades para llevar respuestas estructurales a las realidades a esas mismas leyes, en este país nos toca pensar a través del litigio estratégico para poder desafiar los problemas estructurales y ni siquiera con órdenes estructurales de las autoridades judiciales logramos revertir definitivamente las condiciones de la desigualdad, no, es muy curioso, pero entonces allí hay avances, pero entonces lo que parecía o prometía ser una paz transformadora en esos planteamientos genéricos, abstractos, no implementados del acuerdo hoy se le califica que me parece muy acertado como la paz austera, una paz de mínimos, una paz de a lo que llegamos, una paz en donde además, el presupuesto para la implementación, no necesariamente es un presupuesto al que le aporta Colombia como si fuese su agenda prioritaria, el presupuesto principal que sostiene la implementación de la paz es un presupuesto que viene de la cooperación, de la autogestión de las instituciones comprometidas con la implementación de la paz y eso es algo que nos debería ponernos a pensar en términos reales de lo que significa un país que se aboca a la paz, pero sin los recursos económicos para implementar la paz, un país que argumenta tener no solamente un acuerdo sino una política pública para la paz,

que es lo que supone se consiguió con el acto legislativo pero una política pública no solamente necesita un instrumento que así lo declare, sino necesita un plan de acción, necesita unos recursos, necesita un presupuesto y necesita unas acciones de priorización y el acuerdo tiene algunos de esos instrumentos pero no con la suficiente fuerza como para que nosotros efectivamente pudiésemos decir estamos en la política pública de la paz, no, entonces sí, creo que en este momento esto de la paz austera, también es un factor que imposibilita una adecuada implementación mucho del presupuesto se va, que tiene, digamos tiene un importante sentido, tiene una institucionalidad y tiene unos funcionarios haciendo la tarea, pero la paz para que llegue como una versión de la que es parte el Estado también necesita recursos para la implementación en el territorio, si, necesita estrategias de cambio de la manera de ser Estado en el territorio, no, las realidades de los territorios en Colombia son absolutamente disímiles, eso del pluralismo en Colombia tenemos que empezar a creérnoslo

a verlo y a buscar la manera de implementar eso en el territorio, las, lo que hoy necesita el departamento por ejemplo del Putumayo de la Amazonía Occidental, Guaviare, Putumayo, Caquetá, entre ellos tres comparten algunas cosas pero entre ellos tres también son mundos absolutamente distintos, en contraste con el que necesita el Caribe colombiano para tener un Estado que construye paz con ellos es absolutamente distinto, y dónde están los recursos para permitir que ese Estado local exista, se instale, los recursos vienen de una serie de visiones de desarrollo que destruyen, desarticular, los territorios, qué posibilidades de paz hay ahí, cuando se estaba suscribiendo la paz, o, más bien no se estaba suscribiendo se estaba discutiéndola paz en la Habana por allá por el 2015, yo, yo era una escéptica lo confieso, yo me preguntaba, cuál es la visión de paz que puede traer esta administración cuando por un lado está intentando sacar adelante ese acuerdo que va a alejar del ejercicio político armado al grupo más antiguo de Colombia y de América Latina de guerrillas, pero paralelamente es el promotor de la mayor cantidad de conflictos socioambientales en los territorios, conflicto es conflicto, si, sea armado, sea social, sea político o sea ambiental, cuál es la posición del Estado frente a ser generador de conflicto y creo que ahí tenemos también que trabajar enormemente, para qué podemos construir autoridades que reconocen su contribución al conflicto y busca transformar esa contribución, no profundizar en esta contribución para contrarrestar un tipo de conflicto pero para re potencializar otros que van a seguir alimentando la misma causa que a mi juicio es la vértebra de este conflicto y es la desigualdad en el país, una desigualdad que además, a la que nos hemos habituado, entonces, bueno yo dejaría por ahí.

ENT: En ese sentido TEST, tú

misma acabas de decir que el tema de la democratización de la tierra del, acceso a la tierra, para las comunidades que históricamente no, o no han tenido

acceso o tienen poca o cuando intentan hacerlo por los efectos del conflicto de la violencia, terminan desplazadas y marginalizadas, en, en algunos asentamientos urbanos en las ciudades cierto, o en zonas que propiamente no son su territorio, pese a eso, digamos, la política de restitución fue vista como un salvavidas para muchas víctimas, para comunidades campesinas y étnicas en general porque sintieron que a través de una sentencia se cumplían prácticamente, digamos los derechos que dice la Constitución y que debería ser el Estado no a través de la biotransicional sino como por Estado cierto. Tú que conociste el proceso de implementación de la Ley 1448 nos gustaría que nos dieras una mirada sobre sus problemas, en la ejecución si por ejemplo esto último que mencionas de la visión del gobierno que promueve una ley que reconoce a las víctimas y promete restituirles las tierras despojadas pero a la vez sostiene un modelo que tiene que genera tensiones por el tema de la locomotora, de la locomotora, minero-energética de la agroindustria de lo que genera la infraestructura en los territorios entonces un poco que nos cuentes no sé si a la luz en general o si del caso que tu viviste de acompañamiento a la comunidad como boca, como lo ves también en términos de las metodologías que implementó la unidad, cómo es esa situación en términos de la Ley 1448.

TEST: Digamos, yo empezaría por decirte que es muy difícil ser o absolutamente defensor, o absolutamente crítico con los instrumentos que dieron vida a un mecanismo de restitución al país por qué, porque ante el recrudecimiento de las acciones del conflicto armado, pero además de esas acciones en un contexto de un país absolutamente desigual, la crisis humanitaria que hubo por el desplazamiento entre el 97 y el 2003 en el país fue enorme y eso necesitaba una respuesta institucional y esa respuesta institucional no llegó por la sabiduría, la voluntad, la bondad de las instituciones, esa respuesta llegó producto de la exigencia de organizaciones de víctimas del desplazamiento, incluso antes de organizarse como víctimas de desplazamiento cuando tú vas a los anales de la corte constitucional y te encuentras con las demandas que originaron la sentenciaste T025 del 2004, te encuentras con que fueron tutelas montadas por un, grupos de personas desplazadas algunas sin mayor asesoría jurídica, unos casos reunían varios, varias demandas o acciones de tutela y otros casos mucho más organizados, mucho más, digamos rigurosos en la argumentación técnica que llegaron también a los estrados judiciales y pues que no tenía ni idea que le están hablando, desplazamiento forzado, qué es eso, sí, yo he visto personas con carteles en los semáforos pero desplazamiento forzado ni siquiera está tipificado como delito en Colombia, el delito de desplazamiento forzado se tipificó en 2001. Entonces cuando estás personas acuden a las instancias judiciales para decir a mí me importa 5 que eso no esté en la ley justamente porque no está en la ley me están haciendo esto a mí justamente porque no hay una sanción, me están haciendo esto a mí, justamente porque usted

no responde porque tiene un listado de competencias y atender a mi o darme una respuesta

estructural o ayudarme a aliviar el sufrimiento que me dejó el desplazamiento, ayudarme a encontrar un acceso a un trabajo o una atención médica sin el bendito carnet de la zona donde yo vivía, o permitirme que mi hijo entre a la escuela de una zona donde yo ni siquiera soy residente mis ni sé si me quiero quedar acá es lo que me está haciendo que mi situación sea más gravosa. Yo no sé si usted puede hacer algo para que yo retorne, pero por favor, haga algo para aliviar mi sufrimiento acá y entonces cuando esto llega a conocimiento de la corte y se dan cuenta de que no es un caso aislado, sino que eso que representan 69 casos era una muestrita de un universo de dificultades aún mayores en otras partes del país. La corte dijo tenemos que hacer algo y tenemos que buscar que la respuesta judicial no sea para el caso a caso, sino para el problema en su conjunto y ahí emitieron 1 de los, creo que fue el tercero o cuarto, la cuarta decisión de estado de cosas inconstitucional no fue el primero, pero fue el más famoso en su momento, dijeron acá en Colombia hay un Estado de cosas inconstitucional con el desplazamiento forzado, no solamente hay que dar una respuesta integral a estas personas, sino que hay que dar una respuesta integral a las víctimas de este delito y los que tienen que dar esa respuesta no es 1 o 2 instituciones, sino un conjunto instituciones, es decir aquí lo que se hace falta es una política pública y da unas órdenes para que se diseñe la política pública, 2004 en 2011 se fórmula no el primer proyecto de ley, habían ya existido varios proyectos de ley, pero ninguno había superado los debates entre otras cosas porque el clima político en el congreso era absolutamente adverso al reconocimiento de lo que los grandes gamonales empresarios y representantes de las élites colombianas querían, entonces cuando finalmente producto de la presión judicial que generó, además un modelo de seguimiento que no era solamente complacer, señor juez primero del circuito de Bogotá haga que el gobierno cumpla, no la corte dijo yo me quedo con el seguimiento de esta decisión, voy a montar una mesa de seguimiento, una comisión especial de seguimiento, que es una comisión además integrada por instituciones estatales y también organizaciones de la sociedad civil entre ellas ongs y organizaciones de víctimas, un modelo sui generis hasta ese momento todas las instancias que tenía que diseñar eso empiezan a sentir la presión y la comunidad internacional también aportó a buscar salidas a esa crisis, que año tras año se volvía más grave en el país. Entonces cuando la ley 1448 surge, mal podríamos decir que es una propuesta de gobierno.

Si es una propuesta que nace en una en un proyecto formulado por la administración de turno del gobierno de turno, pero es producto de una apuesta una reivindicación de una lucha, si así se quiere que los movimientos sociales en el país. ¿Y para qué? para dar una respuesta un problema estructural frente al que el Estado no estaba haciendo nada y era no solamente la acumulación excesiva, si, la gobernanza de la tierra que todavía están en mora en este

país, sino frente a la consecuencia que la profundización de la acumulación trajo como fue el desplazamiento, el abandono y el despojo, no, entonces irnos contra la existencia misma de la ley sería, mostrar muy poco respeto a lo que esos movimientos sociales hicieron, si, por el país y por lo que estaban viviendo las personas que estaban experimentando este tipo de violencia en sus territorios. Sin embargo, este es un modelo que cuando se diseña, pues es un modelo que empieza implementarse en un país todavía en guerra, controlado en los territorios o por las élites, terratenientes, o por los ejércitos de otras élites que no tenían la expectativa de ser los grandes tenedores de tierra, pero sí que tenía la expectativa de usar y explotar esas zonas, no, y hacer posible la aplicación de todos los instrumentos de la ley será un desafío o una ilusión no, entonces es ahí donde empiezan a mostrarse cuáles son las debilidades de la ley, la ley no tenía previsto que la dinámica del conflicto iba a hacer que los que los territorios no solamente cambiarán, sino que la falta de acceso a tierra iba a ser que muchas personas llegaron a los territorios a ocupar las tierras abandonadas por otras personas como ellos. A generar conflictos de iguales en desencuentro, como ellos están denominado algunas organizaciones que me parece una categoría bien interesante, indio, negro campesino, pobres, con falta de acceso y de satisfacción de sus derechos básicos, de sus derechos esenciales, de sus necesidades básicas peleando entre ellos por el mismo pedazo de tierra, cuando el resto de la tierra está acumulada por muy poquitos, actores y representantes de unas cuantas élites. Y, eso pasó, la ley tampoco preveía lo previsible lo que sabía que estaba pasando, porque el despojo tiene unos intereses detrás, el despojo no solamente acontece porque llegan los actores armados violando, asesinando, amedrentando, no, llegan por una razón, entonces la ley perdió de vista, o no quiso tener en la mira que había que contrarrestar esos intereses que para asegurar una restitución así no fuese el modelo que iba a transformar la acumulación de la tierra en el país, pero por lo menos asegurar que los que tenían ese pedazo de tierra o la estaban explotando, que tenían la expectativa un día de convertirse en propietarios, pudiesen volver a esas zonas la ley pasó por alto que cuando intentarán hacerlo un no iban a encontrar el mismo pedazo de tierra, lo iban a encontrar transformado o lo iban a encontrar en manos de un actor que por su poder económico, militar, político iba a impedir materialmente la restitución, y entonces, cuando uno empieza a ver esas dos grandes, omisiones porque tiene muchas omisiones, pero por lo menos esas dos grandes omisiones, uno dice, pues es una ley que no le apuesta a resolver estructuralmente problema, por lo menos el problema del despojo, es una ley que puede estar más bien apostándole, a que eso no se quede así, a que haya alguna consecuencia, a que la persona que fue víctima reciba algún tipo de respuesta estatal, por qué no una compensación, y eso se hizo cada vez más notorio a la llegada de, del cumplimiento del primer periodo de la ley, hoy digo primer periodo porque pareciera todo indicar que la ley va a ser prorrogada, pero cuando estábamos en el año 7 y en el año 8 de

aplicación de la ley, empezamos a ver que los resultados no eran muy altos y que de las experiencias de otros países en las que Colombia quería encontrar algunos aprendizajes la compensación, parecía ser un camino, y un modelo que compensa no es un modelo que restituye. Un modelo que compensa es un modelo que entrega otro tipo de prestación, a la persona que ha sido víctima o de desplazamiento o que ha tenido que abandonar forzosamente o qué ha sido víctima despojo, pero quién despojó, sigue disfrutando de los beneficios de su despojo, y entonces, pareciera ser un instrumento que legítima, desde esa omisión de contrarrestar el despojo y el despojo, no, y hay actores o sectores políticos de este país que han querido distraer la atención en que esos actores que se beneficiaron del despojo son desiguales, son iguales en desencuentro y no, lo cierto, es que los que se beneficiaron del despojo en el país o que contribuyeron, sea porque lo toleraron, sea porque omitieron un deber de diligencia para investigar qué era lo que estaba pasando allí sea porque pagaron directamente para que eso ocurriera pues siguen en la zona donde ese despojo ocurrió y ahí hay una ausencia de una muestra más de cómo la ausencia articulación del país favorece el sostenimiento de condiciones de desigualdad entonces la falta de articulación del mecanismo de restitución con un mecanismo de justicia, que fuese efectivo para investigar el desplazamiento, el despojo o las causas del abandono forzado pues nos pasaron la factura, y hoy la realidad es que encontramos en el territorio casi 20 años después de la emisión de la ley son enormes, 20 años, 10 años, 10 años de emisión de la ley, 20 casi de las luchas de los movimientos sociales por que hubiese un reconocimiento de esa política. Entonces, es ahí donde caben las críticas, no, de nuevo, en un país del fetichismo legal, nos encontramos con un instrumento que reconoció una realidad que tenía que ser reconocida, pero que omitió dirigir sus tentáculos en la realidades que generan esa desigualdad, a las condiciones que generan esa desigualdad, a los actores que alimentan esa desigualdad y ahí están los problemas que son materializables en muchas cosas que una empezó a ver que empezamos a ver los que litigábamos, y acompañábamos organizaciones y comunidades en los procesos de restitución, entonces los hierros de la ley 1448 que tenía una visión y una ruta que es fundamentalmente campesinita, sí, de reclamaciones individuales porque lamentablemente la ley tampoco ha avanzado a reconocer reclamaciones colectivas para los movimientos campesinos, eso es un saldo que la ley también tiene, porqué los procesos campesinos están altamente organizados, hay una figura constitucional que tiene, que no ha sido o desarrollado jurídicamente en debida forma, pero que ha recibido de más enormes estigmas en el país, y aísla de zonas de reserva campesina, y entonces no conocemos el primer proceso, yo no lo conozco, el primer proceso de restitución de una zona de reserva campesina, todos son rutas individuales bajo la ley 1448 porque usted es campesino, porque no es indio, porque no es negro, los únicos colectivos son los indígenas, afros de pronto lo RON pero los RON tampoco tienen una ruta de situación clara, tienen unos

principios en el decreto especial específico, pero no tiene una ruta restitución, entonces esos decretos lo que intentaron fue corregido algunos de los vacíos de la ley y nos encontramos con unos decretos que tenía unas cosas interesantes, justamente para atacar esto de los beneficiarios del despojo, y entonces por ejemplo incluyen las nulidades contra títulos que hayan sido otorgados en territorios despojados y esa fue una ficha que intentamos jugar muchos actores interesados en la restitución plena derechos territoriales a comunidades étnicas, pero que empezó obtener obstáculos al interior de la unidad y la ficha cuál era, pedir la nulidad por ejemplo de títulos mineros otorgados en territorios de consejos comunitarios o resguardos indígenas, que estaban reclamando la restitución de sus derechos territoriales, fuese porque hubieses, fueron otorgados antes del reconocimiento del consejo comunitario, es decir una suerte de lo que se denomina un despojo administrativo por silencio de la autoridad del reconocimiento del derecho porque el derecho no lo crea la autoridad, la autoridad lo que hace es reconocer el derecho territorial, entonces la autoridad omitió reconocer el derecho territorial y mientras ella guardaba silencio, otra autoridad del mismo Estado otorga títulos mineros a favor de un tercer, entonces en ese tipo de circunstancias nosotros pedíamos la nulidad de los títulos, y esa figura si tú quieres ir a las demandas y a las sentencias de restitución nunca ha sido aplicada, pese a que existen todas las condiciones para declarar la nulidad de sus títulos, no lo que han declarado las autoridades judiciales es la suspensión de títulos mineros, pero la suspensión es una interrupción de la vigencia del título, el título en la vida jurídica existe cuando está suspendido, no se está ejecutando, pero existe jurídicamente la nulidad hubiese dicho esto nunca pudo haber nacido a la vida jurídica, porque usted no tenía derecho de titular esa área. Y que existan títulos mineros en muchas zonas solicitadas en restitución en un país en conflicto no puede ser considerado una mera casualidad o un accidente?, debe ser examinado como un factor subyacente o vinculado al conflicto y ese análisis ha sido también un análisis en el que las autoridades colombianas tienen un saldo en rojo, así como esta esa figura que los decretos étnicos intentaron introducir para que la visión del beneficiario del despojo no quedará por fuera del análisis de la restitución, pues hubo otras prácticas que al interior de la unidad fueron altamente cuestionables, porque mientras en unos casos como en el caso del alto Andágueda, en la demanda se incluía la solicitud de la nulidad, la unidad pedía la solicitud de nulidad de los títulos, en casos como el de cocomo poca la unidad empezó, los funcionarios al interior de la unidad, porque es muy difícil hacer una homogenización de todos los que están al interior de la institución, algunos funcionarios a cargo del caso querían pedir la nulidad pero sabía que iban a tener tropiezos que la demanda no sería firmada, entonces nos pedían a los que hacíamos parte de organizaciones sociales y que representábamos a las comunidades que en demanda aparte un escrito de la comunidad interesada, aparte solicitáramos la manualidad, entonces empezaban a disminuirse las

capacidades de los funcionarios al interior de la misma institución para hacer uso de las figuras que están en la ley, hacían parte del orden jurídico, no nos estamos inventando algo que no estuviera reconocido, no estamos yendo al inicio de los tiempos cuando las organizaciones de desplazados están pidiendo una política, no ya la política existía los instrumentos existían estaban ahí, entonces estábamos únicamente velando porque el Estado de derecho se cumpliera, y aparte de esa presión que empezaron a experimentar sus funcionarios se crea un filtro al interior de la unidad, que es el grupo AMEI, polémico, porque la pregunta era, ¿Cuál es su labor al interior de un escenario de una institución que tiene una competencia constitucional de restituir derechos? y el derecho de restitución es un derecho fundamental una vez emite la sentencia T025 y se complementa con otros instrumentos de índole internacional el rango jurídico, la naturaleza de ese derecho es un derecho fundamental, que hace un grupo especializado, no en el derecho fundamental de restitución, sino en política pública extractiva al interior de la unidad analizando las demandas de restitución, eso significa acaso que el derecho fundamental de restitución está subordinado al análisis de conveniencia de la política extractiva del país. Eso significa caso que la URT deja de tener una competencia prioritaria o especializada en restitución y pasa a ser una entidad con competencia misional y temática en política pública extractivas, eso parecía una desnaturalización del objetivo fundamental de la unidad de restitución de tierras, y pese a los muchos cuestionamientos en el grupo AMEI, quedo instalado y continúa haciendo su trabajo en la unidad de restitución.

Como te decía al principio, ser absolutamente crítica con la ley, o con el mecanismo sería muy injusto en lo que ha representado para los movimientos sociales en el país y entonces mientras eso pasaba la unidad también hacia otros ejercicios, entonces por ejemplo, utilizaba un enfoque o intentaba implementar un enfoque, o varios enfoques diferenciales, no, entonces tenía un grupo de asuntos étnicos, si, a diferencia de otras instituciones que llevaban muchos años existiendo en el país sin efectivamente un grupo especializado en la perspectiva étnica y en la perspectiva étnica y territorial, no, tenía equipos especializados en el enfoque de género, no, cómo asegurar que el acceso a la tierra para la restitución no va a ser atravesado por las mismas prácticas hetero patriarcales que han impedido que la mujer sea titular de derechos territoriales o sobre la tierra, no, entonces claro se vino la tarea de identificar cuáles eran los obstáculos que en la ley civil de acceso a la tierra porque al final la ley de restitución era una ley de transicionalidad en temas de tierra, pero que bebía mucho del régimen civil de Colombia que es por allá de 1886, entonces cuando, cuando tú ves un equipo un organismo, de una institución buscando identificar esos cuellos de botella para también en sus demandas o en su actuación como institución buscar la manera de remover esos cuellos de botella, tú también dices, pues hay que reconocerles la tarea o tenían unos equipos que estaban

implementando con otros actores Como por ejemplo, la Universidad Nacional enfoques novedosos como el enfoque acción sin daño, qué significa esa vaina, pues mamita hacer análisis de contexto, hacer análisis de los impactos que usted quiere causar, los riesgos que trae hacer restitución en un país en conflicto y proporcionar una sugerencia de ruta de restitución para que la restitución sea sostenible. Y entonces tenía una dirección social de si, no abogado pero trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos metidos en las zonas haciendo análisis de contexto para medir los riesgos, para saber qué tanto incluir ciertas, ciertas actividades en el marco del procedimiento administrativo de restitución ponía o no en riesgo a la gente, si eso le podía costar la vida a las personas reclamantes de tierras, si eso iba a implicar que si procedían a una suerte de restitución esa restitución luego iba a ser minada materialmente por alguna compra ilegal frente algún actor o que algún actor iba a volver a ser desplazamiento y entonces esa víctima que ya había pasado por un despojo, iba a tener que enfrentarse a esa realidad otra vez, y eso era necesario porque como te decía la restitución la estaban haciendo en un escenario de conflicto, entonces que se haya dedicado a hacer eso, no, que no fuese solamente llenar el papelito, ver si tenían o no los requisitos y pasar a los otros trámites, pues hablaba de una institución haciendo una tarea que merecía una suerte de reconocimiento, pero esos eran avances, digamos, particulares mientras lo estructural se estaba también generando su andamiaje para contener que el modelo de restitución pudiera afectar el modelo de acumulación, entonces esos otros avances que estaba haciendo la unidad, no tenían la entidad para detener, para para hacer más bien que la restitución fuese un modelo que iba contrarrestar la acumulación, no, de la tierra en el país, entonces, sí, avances interesantes se les reconocen pero por el otro lado estaba pasando lo otro, estaban protegiendo a los actores más fuertes beneficiados del despojo y eso digamos, hay que mencionarlo porque, porque eso justamente ha impedido que la realidad sea una realidad, perdón, que la restitución sea una realidad en los territorios, si, cuando se restituye un predio en una zona que en este momento está siendo explotado por minería o cuando se le dice una comunidad desplazada de su zona que no puede volver porque tiene un polígono tipo, no sé qué de yacimientos no convencionales o convencionales en la zona donde, donde solían habitar, ¿pues qué otro tipo de actividad productiva podría permitir la permanencia de esa persona o de esa comunidad en esa zona, si el uso de la tierra ya no es para el proyecto de vida, que ella tenía en esa zona antes del despojo, si no es para un proyecto distinto avalado por el Estado? para el que se benefició de manera directa, indirecta, por omisión, por acción, ese actor que hoy está explotando esa zona, entonces ahí se está jugando la legitimidad del proceso de restitución, que tanto la restitución está llegando a cuestionar a los que han acumulado la tierra en el país a los que se han beneficiado por la acumulación y el despojo de tierras del país. Y lo otro es, los problemas no están solamente en lo administrativo, el mecanismo de restitución hoy tiene enormes

desafíos en el post fallo, porque curiosamente la judicatura, curiosamente la judicatura en un país de fetichismo legal es una judicatura que tiende no digo que todo sea sí, pero que tiende a buscar la realización del objetivo del mecanismo esa es una judicatura que tenido que entrenarse en que este es un mecanismo de Justicia transicional más inspirado por principios constitucionales que por principio civiles, pese a que es una especialidad dentro de una jurisdicción típicamente civil, no y esta es una judicatura que ha sido abierta a sensibilizarse con lo que implica hacer restitución en un país de acumuladores, esa judicatura tiene documentados todos los patrones de despojo del país, por lo menos de las zonas donde ellos superan esos cinco distritos judiciales que hoy existen son distritos que en la verdad judicial que tienen en sus anaqueles, reposan las evidencias de lo que ha sido la, los mecanismos de despojo y también tienen en su cabeza todo lo que no probaron, pudieron probar en ese, en esos procesos judiciales por el rigor que tiene la prueba judicial, pero que tienen los indicios, los rumores de lo que estaba inspirando el despojo en esas zonas, y entonces esos jueces, si bien buscaron la manera de impulsar sentencias, algunas más progresistas que otras o algunas digamos mucho más transformadoras en la vida de la gente que otras de las víctimas digo, son unos jueces que en este mundo tienen problemas para hacer que esas sentencia se cumplan, porque después de que sale la decisión de su despacho, pues ellos tienen que hacer, tiene tienen que jugar con la voluntad de las instituciones para que esas órdenes se implementen, y entonces las instituciones lo que dicen es, no tenemos presupuesto para implementar esas cosas chocalas que usted se ha inventado, porque ustedes han querido hacer una justicia transformadora, entonces no pasa solamente por el reconocimiento de un derecho sobre un predio, sino de unos proyectos productivos, de unos proyectos productivos con unas envergaduras, con además unas condiciones, la necesidad de tener unas condiciones de servicios públicos y sociales y prestaciones del Estado en esas zonas abandonadas históricamente por el Estado y yo no tengo cómo priorizar uno de esos casos frente al resto de casos que yo tengo por cumplir, tanto de restitución como de otras demandas de derechos económicos, sociales y culturales en el país, porque al final lo transformador está muy ligado a la protección de derechos económicos, sociales y culturales, entonces el nivel de cumplimiento de esas sentencias es mínimo no es solamente tener una gran cifra de sentencias, que no es grande, o sea, hoy estamos hablando de más o menos entre 5000 y 6000 sentencias de restitución en lo que lleva, en lo que llevamos de la implementación de la ley, hasta hace unos meses eran 5400 y pico, no sé si en los últimos meses se han podido producir unas 600 o 400 sentencias más, entonces digamos que estamos entre 5000-6000 sentencias en un universo de ocho millones de colombianos desplazados, pues no, eso no es ni siquiera el 10%, no, pero entonces, teniendo estas sentencias, esas poquísimas sentencias sería ideal que Colombia pudiera decir, esas poquísimas sentencias que tenemos, todas están cumplidas a cabalidad y no, y volvemos el

problema la política pública, las instituciones que tienen que cumplir sus sentencias no se creen que son instituciones de restitución, hágame el favor, que no tienen ningún deber en clave del modelo reparatorio, que es el modelo mínimo en un escenario conflicto no, de ti cuando se trata de acceso a la tierra y entonces ahí encontramos otro boquete para que el mecanismo que un día fue luchado por unas organizaciones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de sus derechos territoriales y sobre la tierra, pues sea efectivo, tenemos sentencias para enmarcar, tenemos instrumentos jurídicos, no, la fórmula del Estado derecho, una fórmula precaria que no logra hacer que la brecha de implementación entre lo jurídico y la realidad sea menor, no.

ENT: TEST, tu misma mencionabas

hace un momento, que curiosamente la ley no tuvo un mecanismo judicial de investigación sobre el despojo, entonces tanto los puestos de caracterización de proyección de las demandas y lo que luego llega a juicio en los contextos digamos, si hay una explicación muy enfocada en el tema de los actores, sobre todo armados ilegales, cómo fue su participación y principalmente de paramilitarismo porque el tema de guerrillas se ha esclarecido muy poco, porque las oficinas territoriales abrieron justo después de la firma del acuerdo, o sea a finales del 2016, en ese sentido yo te quería preguntar en términos de crecimiento, digamos la comisión cuál, qué mirada debe tener para mirar otros mecanismos de despojo y me refiero a los que se han usado desde la misma institucionalidad, entonces me gustaría que nos hablaras de eso, por ejemplo el tema de las licencias ambientales, del rol por ejemplo de algunos ministerios, como el ministerio ambiente en los territorios donde justamente esta condensada, digamos el grueso de la restitución de derechos territoriales, más que del predio a predio.

TEST: Para llegar a eso yo creo

que convendría decir primero ENT que incluso cuando en los, porque está, esta queja de la falta de articulación del mecanismo de restitución con otros mecanismos de investigación del despojo, pues haya generado un efecto perverso, previsible y que le apunta a la falta de voluntad por hacer de la acumulación a algo que se transforme en este país que cambie, pasa por el hecho de que festivamente en los debates que se hicieron para el momento en el que se estaba metiendo la ley, pues previamente se había debatido la necesidad de implementar otro mecanismo de justicia transicional que fue el de la 975, si, entonces cuando se estaba debatiendo eso se dijo pues por un lado vamos a delimitar las especialidades de los mecanismos, no, entonces este lo vamos a concentrar en la responsabilidad penal y ya veremos cómo resolvemos el tema de las víctimas de las acciones de estos que tendrían que responder penalmente, pero ni siquiera examinando la responsabilidad de los que finalmente tendría que ser llamados a la justicia y ser sancionados, allí se profundizó en las responsabilidades, allí no se esclareció completamente la cadena de responsabilidades, porque pensar que el mecanismo judicial que existía en lo penal se bastaba o era suficiente

con que llegara únicamente los actores armados pues es un errado punto de partida, porque los actores armados si bien tenían unas puestas políticas, la insurgencia unas, los grupos paramilitares otras, desde la conservación del estatus quo, de las instituciones y de las élites en el país, pues también esos actores funcionaban en beneficio de otros que nunca fueron llevados a la justicia por cuenta de esclarecer la responsabilidad de los actores armados, entonces ahí el mecanismo judicial de investigación fallo, tenían varias compulsas de copias que ante las instancias ordinarias nunca avanzaron y el país hoy todavía espera saber qué pasa con la responsabilidad de esos actores económicos, una de las primeras respuestas que daba el estado colombiano es que nuestro estado derecho, nuestra fórmula jurídica no es una responsabilidad penal de actores jurídicos sino una responsabilidad penal de actores naturales y yo solamente puedo sancionar personas no empresas, entonces, me piden que investigue a una empresa, ¡tanto como investigar a la empresa! no lo puedo hacer, lo que puedo hacer es investigar algunos actores al interior de la empresa, puedo investigar directivos pero no tengo pruebas contra los directivos, tengo pruebas contra ¡jefes de seguridad!, a los ex jefes de seguridad los estoy investigando, pero esas investigaciones tampoco han avanzado ¿no? y, entonces, empieza a diluirse en una especie de ¡velo! ¿no?, la responsabilidades de los verdaderos beneficiarios del despojo, que no son personas naturales sino que pasan por ser, también y especialmente en los territorios, personas jurídicas y eso me lleva, digamos, al otro vínculo y es, esas personas jurídicas tienden a considerarse actores ilegales ¿no?, están debidamente constituidos ante la ley, pero y lo ilegal de sus acciones, no solamente no ha sido investigado en el escenario penal, sino que, es avalado a través de otros instrumentos jurídicos que son, a mi juicio, dispositivos jurídicos, legales, de despojo de derechos ¿sí?, no solamente de la tierra sino ¡despojo de derechos!, porque hay que entender la tierra en unas relaciones mucho más integrales como sistemas de vida ¿no? como sistemas interconectados, no solamente un pedazo de predio delimitado en un polígono, de los que se han valido estos actores para, justamente, hacerse del control en los territorios, de un control que no es solamente ¡material!, es un control económico, es un control político, es un control de explotación ¿no? y en el tiempo en que yo, eh, yo tengo más o menos 14 años de experiencia trabajando en cusas de derechos humanos y, un factor común en donde se han presentado violaciones de derechos, donde se han presentado desplazamientos, despojos, es, la presencia de una actividad económica que genera tensiones sociales y detrás de esa actividad económica suele haber un actor de tipo privado económico, con una capacidad, eh, de influencia importante en las políticas de la nación ¡y con todos los avales! y respaldos institucionales que hacen, aún, ¡más difícil! llegar a develar, su nivel de responsabilidad en las acciones que han vulnerado a las poblaciones ¡y esas vulneraciones pasan! por vulneraciones directas a derechos civiles y políticos, y vulneraciones a derechos sociales, económicos o

culturales que también terminan por ser ¡una forma! de despojar derechos a las poblaciones en los territorios, voy a poner un ejemplo.

Entonces, por un lado, pensemos en

una empresa que, llega al país en un escenario de conflicto, pide un título para hacer una actividad económica, por ejemplo, una explotación minera, cuando llega el conflicto dice no conocer el contexto, cuando llega la zona donde le otorga el título dice no saber que está en una zona de conflicto, título que viene acompañada de una licencia ambiental para explotar durante "x" cantidad de años, una zona y donde esa explotación pasa por encontrarse con distintos tipos de actores que, pone en evidencia que, no todo el mundo no está de acuerdo con su actividad económica y que, para resguardarse de esas oposiciones contrata a la fuerza pública para que, le preste sus servicios de seguridad, ¡enton! ¡ss! uno al principio diría "¡pero hizo todos los pasos!, esta legítimamente constituida, llegó al país, pidió el título minero, pidió una licencia de explotación ambiental y pidió que los resguardaran de las actividades que, pudieran otros ejercer otros en su contra porque no estaban de acuerdo con su actividad, con su explotación", eso podría funcionar en un país, de realidad normal, donde no hay conflicto armado, ¡el deber! del, de, debida diligencia de un actor económico que llega un país en conflicto es, saber cuáles son las dinámicas del conflicto, cuáles son los actores que están presentes en la zona que le interesa explotar, cuáles son las acciones ¡en contra! de la población civil, cuál es la posición de la sociedad civil frente a lo que quisieran que ocurriera en ese territorio, es una, posición de licencia social sobre una actividad ¿externa?, ¿estarían interesados en que eso se realice? o ¿es una posición que puede poner en riesgo su inversión?, ¡eso es lo mínimo! que hacen los actores cuando llegan al país ¡y!, saber qué tipo de actividades desempeñan las autoridades públicas armadas en ese escenario de contexto, si es desde la sencilla normalidad, hacer un uso extraordinario, solamente en situaciones excepcionales de la fuerza o sí es un uso constante de la fuerza porque está en un país en conflicto y qué tipo de acciones de la fuerza, hace ¡ese! actor de la fuerza pública y entonces cuando uno se da cuenta que es el deber de cuidado de ¡un actor empresarial!, uno tendría que mirar con una lupa mucho más exigente cuáles han sido las acciones en las que han participado las empresas privadas, pero también las autoridades nacionales en el posicionamiento de una empresa ¡en un territorio! y cuál es su ¡contribución!, a la profundización, o a la superación, o a la transformación de ese conflicto, entonces, lo que ha pasado en varias partes, por ejemplo, lo que paso con ¡ORGANIZACIÓN PRIVADA1!, en César, ha sido, en lo que ellos históricamente se han

excusado, escudado es "nosotros tenemos un título por 30 años, mientras íbamos explotando, pedimos otros títulos, tenemos licencias ambientales ¡y!, hemos sido protegidos por la fuerza pública, no hemos pagado ningún otro actor distinto a la fuerza pública, no hemos tenido relaciones con

el paramilitarismo!" dicen ellos "¡no sabíamos que el paramilitarismo existía!", dijeron alguno de los directivos en algún momento de su vida, durante el tiempo que operaron o que han operado en, aquí en el país y luego empezó, a surgir, otro tipo de verdades, entonces, sí obtuvieron el título, primero, de una mina ¡por 30 años!, luego, empezaron a solicitar en titulación, otros títulos, de otras minas, todo esto en el absoluto desconocimiento de las poblaciones, muchos de los títulos que pidieron eran parte de zonas, de sabanas comunales, que eran territorios donde la gente se alimentaba, cazaba, transitaba, empezaron a cambiar la manera en que, eh, no solamente lucía el territorio, sino en que el territorio ¡funcionaba!, para la gente que lo habitaba, eso, no solamente desencadenó en una animosidad de la población civil que empezó a ver cómo un actor privado extranjero, se hacía, se apoderaba de un territorio que históricamente había sido de ellos y que ¡no era de nadie!, ¡que era de todos! ¡que era de uso colectivo!, que era un bien ¡común! y que eran las sabanas, pero que ¡además!, empezaron a apoderarse del agua, que con, las autorizaciones porque no era un apoderamiento ¡ilegales!, lo que siempre ha dicho ORGANIZACIÓN PRIVADA1, es un uso que yo estoy haciendo legítimo, porque a mí el estado

me está autorizando a utilizar estas fuentes hídricas y entonces, han desviado un promedio de 9 ríos en la zona, donde, esos desvíos, han tenido de alguna manera, dice el estado "un impacto" en la disminución del acceso a recursos hídricos por parte de las poblaciones pero no es un impacto que no pueda ser mitigado y donde en ¡muchas de esas zonas! hoy, hay un ¡altísimo! desabastecimiento

hídrico para las poblaciones tanto urbanas como rurales, tanto más las rurales y que, además de cambiar de esta manera la funcionalidad del sistema ecológico, lo ha contaminado terriblemente ¡y! los niveles de contaminación incluso, llegaron a un punto en el que, no le quedó otra alternativa al gobierno que reconocer que era absolutamente ¡insostenible! que la gente siguiera viviendo en una zona tan contaminada y que tenían que salir y que quienes tenían que asegurarse de que salieran, adecuadamente de la zona, eran las empresas que habían contaminado, porque después de ORGANIZACIÓN PRIVADA1, llegaron otras empresas, generándose,

lo que ellos denominan un "reasentamiento involuntario por contaminación", que no es otra cosa que ¡desplazar! forzosamente por razones ambientales a las personas de su territorio. Pero, sin que eso fuese suficiente o lo único en lo que ha participado una empresa como ORGANIZACIÓN PRIVADA1, pues,

tenía que sobrevivir en un escenario de contexto ¡en un escenario de conflicto!, no de contexto, de conflicto, entonces, para sobrevivir, estableció según lo han dicho varios paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz ¡vínculos! con, eh, comandantes paramilitares entre ellos RANGO1, que operaba en la zona, proporcionando ¡los nombres! de los trabajadores de su empresa que

estaban ¡sindicalizados!, ¡exigiéndole! mejores condiciones para los trabajadores y las comunidades, que ellos estaban contaminando o explotando y muchos de esos líderes fueron, asesinados, desplazados, torturados, desaparecidos por grupos paramilitares en acciones que ¡ya! el mismo grupo paramilitar reconoció haber desempeñado en un asocio con ORGANIZACIÓN PRIVADA1, ¡o!, haber pagado

batallones que luego se vieron involucrados en acciones de amedrentamiento a las comunidades o en acciones de violaciones de derechos humanos a las comunidades y seguir pagando esos contratos de seguridad sin ningún tipo de intención de revisar si ¡a quienes yo les estoy pagando! están o no respetando los estándares de derechos humanos, que ¡sería lo mínimo! ¿no?, desde la lógica de la debida diligencia, entonces, ¡un ejemplo como esos!, nos obligarían a preguntarnos "¿los mecanismos de identificación de responsabilidad del despojo han sido adecuados para sancionar o transformar esa realidad de la que participo ORGANIZACIÓN PRIVADA1?, yo te diría, ¡no!, los mecanismos de justicia han llegado

solo a decir que efectivamente ORGANIZACIÓN PRIVADA1 pago para que se cometieran violaciones

a derechos humanos, los mecanismos de justicia ambiental han dicho

"efectivamente ORGANIZACIÓN PRIVADA1 ha contaminado la zona y ha obligado al reasentamiento involuntario por razones de contaminación de comunidades, ¡eso! ha derivado una sanción ejemplar para ORGANIZACIÓN PRIVADA1, por ser un beneficiario del

despojo que, ocasionó o por vía de los actores del conflicto armado ¡o por vía! de sus acciones de extracción, ¡no!, ORGANIZACIÓN PRIVADA1 sigue operando en el país, ¿se ha

esclarecido a través de ¡informes institucionales!, ¡su rol! en esos distintos tipos de desplazamiento? ¡no!, no hemos tenido ni un esfuerzo de esclarecimiento judicial, ni un esfuerzo de esclarecimiento extrajudicial, lo que hemos tenido son ¡esfuerzos alternativos de verdad! ejercidos por las comunidades y las organizaciones sociales que hemos denunciado esto ¡incluso!, en lo que tiene que ver, no con su vinculación en el conflicto armado, que ahí es donde yo creo que hay que aplicar entre otros, los estándares de la debida diligencia de los que tanto ¡hablan las empresas!, porque ¡en el mundo! la debida diligencia, lo que ha hecho ORGANIZACIÓN PRIVADA1, da, para derivar una responsabilidad por ¡negligencia!, ¡por lo menos!, "ah no, usted no participó directamente, pero ¡con su omisión, usted pago, fuerza pública! que participo en violación a derechos humanos, con la omisión de controlar a sus funcionarios de seguridad ¡usted facilitó la información de trabajadores de su sindicato ¡a! paramilitares que luego les persiguieron ¡usted como empresa! como unidad, como institución tendría que responder por lo menos por omisión, por esas acciones, porque no tenía mecanismo de adecuado control, de la información de sus trabajadores sindicalizados, ¡usted tiene que proteger a sus trabajadores

sindicalizados!, no exponerlos ¡y usted! tiene que asegurarse que, si usted paga servicios de seguridad, a ¡quienes se los paguen sean ¡pristiños! [DUD:1:18:15] sean personas que se comportan dentro de los estándares legales y los batallones a los que usted les pagó dinero, están involucrados a derechos humanos, usted ni siquiera verificó que los comandantes de esos batallones o las personas investigadas por esos, eh, hechos de violaciones a derechos humanos, no estuvieran prestando los servicios por los que usted estaba pagando, ahí usted está violando como ¡mínimo! la debida diligencia, es como mínimo, por negligencia tendría que hacerse un proceso sansonatorio contra ORGANIZACIÓN PRIVADA1, pero ¿dónde está el esclarecimiento de su contribución? ¡y en especial! de su beneficio, ¿qué ha reportado ORGANIZACIÓN PRIVADA1 de todo lo que pasó en

términos del conflicto armado en el departamento?, los beneficios directos ¡e indirectos!, del aniquilamiento del movimiento social en César, hace un momento yo decía, César no tiene oposición, ¡claro!, porque fue toda ¡aniquilada!, fue toda ¡exterminada!, ¡se pacifico! literalmente el César, por, a través de la fuerza, a través de la violencia, ahí, digamos, brotes de oposición, de gente pensante, ¡sí!, pero, ese movimiento social ¡fuerte! que existía en el César, ese movimiento social fue ¡aniquilado!, ¡y hoy! por eso, no es un territorio en disputa ¡están tranquilos!, no se ven esos márgenes de violencia que vemos en otras zonas del país y no es gratuito que haya un actor, empresarial, disfrutando de esa pacificación en ese territorio, entonces ¡dónde! está el esclarecimiento de eso. Y por el otro lado, ¿dónde está el esclarecimiento de la contribución de ORGANIZACIÓN PRIVADA1 a un desplazamiento por causas ambientales?, porque

el desplazamiento ¡territorial en el país!, necesita ser complejizado ¡no puede ser solamente el conflicto armado!, la JEP [Jurisdicción Especial de Paz] ya está hablando, finalmente, un órgano judicial ¡finalmente está hablando! de, delitos contra la naturaleza, que hay que investigar en el marco de lo transicional ¡genial!, esos actores civiles deberían estar allá, rindiendo explicación y ¡no por voluntad!, el mecanismo tendría que ser, imperativo ¿no? debería exigir ¡demandar! la presencia de esos actores para ser sancionados si quisiéramos efectivamente transitar hacia la reconciliación, pero ¡bueno!, ¡eso es lo que hay!, entonces, por lo menos en lo voluntario, los actores, los terceros civiles, como los llaman, que en realidad no deberían ser tampoco ¡esa categoría! de tercero civil ¡debería ser repensada!. Si tu eres beneficiario de una acción, en la que tú estás contribuyendo de manera directa, tú eres un determinador de la acción, no eres un tercero, no eres un tercero civil de la acción, si eres un beneficiario por omisión porque no cumpliste con tu deber de diligencia, de pronto, en esa categoría, podría ser considerado un tercero civil, pero, por lo menos, las figuras que ya teníamos acá en el país, nos daban, a través de los actores y factores subyacentes ¡y vinculados!, o sea, por qué no explorar y desarrollar mejor esa figura que tanto trabajo nos costó

meter en las decisiones, por ejemplo, en la Corte Constitucional, cuando se trataba de entender el conflicto y de vincular a otros que sin ser armados, se estaban beneficiando o estaban ¡promocionando! el conflicto, ¿no?, pero bueno, por lo menos, la JEP está investigando los delitos contra la naturaleza, como parte o en el contexto del conflicto armado, pero, aquí hay que pensar, en complejizar digamos esa reflexión, si la realidad de acceso a la tierra y el disfrute de derechos territoriales ya es precario, porque somos el país más desigual de América Latina en el acceso a la tierra, el cuarto país más desigual en acceso en la tierra ¡en el mundo!, si esa realidad ya era compleja, antes del recrudecimiento ¡más grande! del conflicto, con el recrudecimiento del conflicto moderno, como lo conocemos ¿no?, dentro del 48 y la década, y a hoy, ¿sí?, ese acceso es aún más precario y hemos visto cuales han sido las consecuencias del despojo que no son definitivamente contrarrestadas por la restitución ¿sí?, y nos encontramos en un escenario en el que nos está hablando de que, las razones por las que la gente ha tenido que desocupar el campo, no son solamente del conflicto armado, sino los modelos económicos, tendríamos que repensarnos qué es lo que estamos esclareciendo en clave de desplazamiento y despojo territorial, si nosotros nos concentramos únicamente en el del conflicto armado, nos quedamos cortos, porque el despojo de derechos territoriales, de acceso a la tierra, en el marco de la implementación de modelos económicos ¡pasaron en el marco del conflicto!, esos modelos económicos que hoy conocemos, pudieron ser implementados dentro de otras cosas porque teníamos una dinámica de conflicto que, no solo distraía a la sociedad civil de esos debates sino que ¡le impedía llegar a esos debates!, la política en Colombia pese a que se dice participativa y representativa en el Congreso, es representativa solamente una visión de país, la visión más crítica no ha llegado al Congreso, o sí ha llegado, ha llegado en una posición minoritaria donde debatir ese modelo, ha sido, casi que, imposible, se debate pero ¡no se cambia! en la instancia del Congreso, los movimientos sociales han intentado cambiar la implementación, no del modelo, pero sí de ¡algunas medidas del modelo!, Cumaral, eh, Cajamarca, varias, Pauramena, o sea, ahora se me escapan todos los nombres de los municipios que han hecho consultas populares para decir "¡Aquí, con esas medidas extractivas no vengan!" ¡y pese! a que se ha hecho ese ejercicio desde los mismos mecanismos y las instancias legales que existen, de participación ¡constitucional!, ha sido, echadas, a la basura, con decisiones de otras instancias que les quitan los efectos de ¡vinculatoriedad! a esos procesos, la gente no está contenta con ese modelo y de un momento a otro, en medio de la construcción, porque eso tampoco es accidental, en medio de la construcción de un acuerdo para la salida política al conflicto armado, empezaron a hacerse visibles estas confrontaciones a un modelo económico nutrido del conflicto, y eso, no solo está hablando del conflicto, sino, y de las búsquedas de salida al conflicto, sino, de cómo la gente quiere prevenir que en nuevos desplazamiento, ahora, por cuenta de este modelo ¡se sigan

produciendo en el país!, y entonces acá también la pregunta va a ser ¿los mecanismos que analicen el desplazamiento y el despojo, van a trabajar desarticuladamente de la realidad social? porque, yo sí creo que, si nosotros queremos, un poquito contrarrestar, esta instrumentalización que este gobierno está haciendo del acuerdo, pues hay que, hablar del despojo y del desplazamiento a través del modelo económico alimentado del conflicto, que no es solamente de gente "mala, oscura, pagando ejército de la muerte" no, es gente contaminando, expropiando los territorios y expulsando a las personas de las zonas en las que pueden construir proyectos de vida que nos hablen de un mundo en el que quepan muchos mundos ¿sí? y creo que hacía allá tendríamos que aprender a transitar, creo que tú generación y la mía no la vamos a ver, pero, hacía allá tenemos que plantear la reflexión y ahí, a mí lo que me sorprende y me sorprende muy gratamente es que, hay varios grupos sociales, hablando de la complejidad del desplazamiento más allá del conflicto, entonces, por ejemplo, el Observatorio de Desplazamientos, de la Universidad de Cartagena, fue fundado hace varios años y está dirigido por una profesora muy querida de allá, de la universidad que se llama ----- ella murió el año pasado, en un accidente así como, muy inesperado, y, ellos eran consciente que el desplazamiento en el Caribe no solamente el desplazamiento por los actores armados, el desplazamiento en el Caribe es por él, la acumulación de la tierra sí, pero, para propósitos de desarrollo, ellos tienen investigaciones interesantes que puedes rastrear, justamente para entender ese concepto "¡los! desplazamientos" ¿no?.

ENT: Johana, tú ya mencionaste, hace un momento que, el despojo fue más complejo en términos también de lo territorial, no solo la suma de muchas violaciones a los derechos humanos sino contra la naturaleza, en el acceso al agua, en la calidad del aire, en el uso del territorio mismo, que son clave para la supervivencia y sobre todo para la calidad de vida de las poblaciones, en términos gruesos de impactos

TEST: Sí [audio: ujum]

ENT: Sobre el despojo el desplazamiento, eh, digamos, tú has hablado, ya de un elemento, o sea, hay impactos negativos, impactos positivos, a mí me pareció curioso lo que has mencionado de que, pese a la crudeza del conflicto y a los desplazamientos y a todo lo que le ocurrió a la gente, los movimientos sociales son muy fuertes y coherentes en la exigencia permanente de la implementación del acuerdo y de sus reclamaciones, digamos, que ese es un elemento que rescato de lo que estamos hablando, o sea, que pese a todo lo que les ha pasado, las comunidades siguen firmes en seguir reclamando. Sobre impactos, digamos, ya del otro lado, no buenos, sino negativos ¿qué crees tú que, que es como lo estructural que debemos decirlo [DUD:1:28:12] o por lo menos, esclarecer y evidenciar.

TEST: Sí [audio: ujum], Ush, qué pregunta [risa]

ENT: [Risa]

TEST: Eh, cuando yo empecé a

trabajar en el colectivo de abogados, yo era una estudiante de derecho, absolutamente concentrada en el tema académico, como que había tenido muy poca interacción con la realidad de este país y tuve la fortuna de conocer a varios colegas que trabajaban allí, otros que estaban en otras partes, pero que habían integrado un movimiento que se llama ORGANIZACIÓN SOCIAL¹ y alguna vez en una conversación ellos, desde las

distintas maneras que han tenido para sobrevivir la muerte de sus padres y madres ¿no?, ellos decían que, si ellos se organizaron y se movilizan por la memoria ¿no? y que es muy importante y que todos los movimientos que, eh, le apuestan a hacer memoria de lo que ha dejado la violencia, digamos, tiene una alta contribución a la sociedades de las que son parte y pero, si a sus padres y madres no las hubiesen asesinado ¿cuál sería la historia que estuviéramos contando de este país?, yo creo que no solamente nos robaron unas personas y unas ideas, sino que nos robaron, el impacto más grande de esta violencia y de este conflicto fue, aniquilar la posibilidad de construir una Colombia distinta, una Colombia que no solamente ebullo, ¿cómo se dice? ¿ebullición?, eh, ebullición

ENT: ¿Hervía?

TEST: Que clamaba cambio pero que

además estaba dando la prueba de que se podía hacer el cambio que incluso esas instituciones que, creían que podían ser, instituciones solo de papel, podían ser aprovechadas por esos movimientos sociales, para producir las transformaciones que este país requería, nos arrancaron una generación, de cambio, nos arrancaron ¡30 años!, en los que efectivamente hubiéramos podido construir otras cosas y hoy estamos haciendo memoria, estamos intentando hacer esclarecimiento, estamos intentando recomponer el tejido social de los movimientos, movimientos que, como tú dices, son tan fuertes que incluso ¡sobreviven! a este embate de la violencia, pero eso no quiere decir que hayan sobrevivido a retomar lo que esa generación estaba construyendo, esa generación estaba construyendo cosas distintas y lo que ellos estaban construyendo hoy esta, lejos de nuestro alcance, lo que tenemos en el acuerdo de paz, es lo básico a lo que llegamos primero en 1960, ¿cuántos años?, tenemos 4 décadas, casi 5, de retraso en lo que podía ser el cambio en las realidades agrarias del país, de las realidades institucionales en clave de democracia, democracia no electoral, democracia del respeto pleno de derechos, de instituciones que se controlan así mismas, donde el abuso de poder no tiene mucho mejor margen porque hay una verdadera relación de pesos y contrapesos, donde, eh, el ciudadano, hace, el derecho, no solamente su representante ¿no?, estamos años luz de eso, para mí el principal impacto que nos ha dejado el conflicto es ese y, cuando tú vas y ves qué es lo que se ha traducido en términos de lo territorial, la sensación es una absoluta desazón, porque es que no solamente,

no se trata de una especie de fórmula matemática donde hay un factor al que se le suma otro, da un resultado distinto, pero si nosotros quisiéramos eliminar ese resultado, entonces, podríamos pasar ese factor al otro lado, poner un menos, ¡no!, lo que nos enseñaron en trigonometría, como para dejar todo en ceros, acá es imposible, lo que ha significado en términos de transformación de los territorios y de las dinámicas sociales estos años de conflictos, es imposible de revertir, la transformación del territorio del César en una ¡cantera!, bueno, no de piedra caliza, pero sí de ¡carbón!, eso, es una huella que es imposible de borrar de las comunidades, del ecosistema, eso es irreversible. César, que era productor de yuca, que podía sostener su canasta alimentaria de los cesarienses, que era un valle bañado por ríos. Cuando yo trabajaba allá recuerdo haber, haberme encontrado con un libro de un poeta, que el nombre se me escapa, pero él llegaba a comparar el César con la tierra ¡del Mana!, porque era absolutamente ¡productiva!, entre el carbón y la caña, la caña [risa] ¡la palma aceitera!, transformaron la región y eso es irreversible, qué hay para el futuro de los niños cesarenses en las zonas rurales, la gente hoy no atreve a atecinar [DUD:1:33:34] nada porque, es muy poco lo que puede recuperarse en términos ambientales de esa región, no van a descansar las elites hasta sacar el último gramo de carbón que puedan extraer de esa región de esa zona y eso no ha contribuido al crecimiento económico de la región, ni a la disminución de las brechas de desigualdad, ni de la superación de los índices de Gini, ¿no?, todo lo contrario, se ha profundizado y no es la única región que esta así en el país, el conflicto armado no solamente causó unos enormes daños y unas enormes heridas, sino que fortaleció unos actores, eso sin duda, los consolidó en sus lugares de poder y de privilegio, la transición los está dejando intocables, y, después de eso, transformar esa sociedad, en lo que podía haber sido el pulso de la década de los 80, pues ya es, imposible, somos una sociedad absolutamente normalizada a este tipo de desigualdad, yo creo que podemos trabajar en hacer consciencia, pero, las causas estructurales de ese esquema vertical de exclusión está más enquistadas ahora que nunca, y como la transición es una concertación ¿sí? porque no hay paz perfecta, porque si no tuviera que escoger entre la guerra fantástica y la paz imperfecta, pues yo sé que todos tan cansados de la violencia vamos a escoger la paz imperfecta, pero en esa lógica, construir una sociedad más equitativa, en este estado de cosas, donde a mi juicio las relaciones son ¡tan! asimétricas, me parece el mayor de los impactos que nos ha dejado el conflicto, yo sí creo que hay unos clarísimos vencedores y son los que se han beneficiado del conflicto durante todos estos años, que no, digamos, no podemos hablar de un único tipo de beneficios, yo creo que han habido como, que ha habido actores que han reportado diferentes beneficios ¿no?, desde, eh, algunos que no son los actores preponderantes, que no definen las dinámicas, que no definen las políticas en que funciona eso, no, sí, de alguna manera han reportado alguna suerte de beneficio ¿sí?, pero, los que están detrás de la acción de la guerra, esos son, los grandes beneficiados

de esto y sí, a los demás nos toca recomponernos y ponernos curitas y ver como ¿no?, sobrellevamos la vida, pero, incluso, me, lamento tener que decir esto y es que, a propósito del discurso de cultura de paz, la reivindicación por una mayor igualdad, es tomada en algunas zonas como una invitación nuevamente a la guerra ¿no?, el cuestionar la desigualdad, el invitar a reconocer que ahí hay un conflicto de tipo económico, político y social, termina siendo como "ay no, nosotros no queremos volver a la dinámica de guerra, la manera de salir adelante es aceptar, esto, esto, ya nos dimos cuenta que esto no va a funcionar por acá, aceptemos este camino" ¿no?, porque hay un excesivo agotamiento y además, hay un excesivo satanización, a cuestionar la desigualdad ¿no?, como estamos también en una lógica de normalización de esa desigualdad, cuestionarla, invitando a activar otros tipos de mecanismos, incluso, mecanismos, vías de hecho ¿no?, es altamente satanizado, ¿qué pasa? ¿qué sigue pasando con la protesta social en este país?, curiosamente en un país que construye paz, la protesta social debería ser indicador de las conflictividades que están emergiendo o profundizándose en medio de la construcción de la paz, y la respuesta de las autoridades en construcción de paz también deberían ser un indicador de la capacidad de construcción de paz de esas autoridades y lo que hemos visto en los últimos 2 años de movilización social y la reacción ante la movilización, nos están hablando de, de esas conflictividades cómo se tramitan, de qué tanta capacidad hay, justamente para verter esa cultura de paz, a esas conflictividades, de seguir, eh, trabajando en la lógica de diálogos de improbables, de la solución política de los conflictos ¿no?, ahí hay una capacidad que se estancó después de la suscripción del acuerdo y entonces la tendencia sigue siendo la misma actitud de las autoridades del estado, incumplir, "ah, tenemos acuerdos, ellos dicen que incumplimos, nosotros les demostramos con unas cifras que estamos cumpliendo", pero las realidades estructurales no se transforman y a veces, yo siento, digamos, que eso es otro efecto de, del conflicto, nosotros normalizamos que esto sea así, nos aguantamos tanto "somos resilientes", pero sí creo que, que, no sé si esto lo han analizado los expertos en impactos psicosociales, tal vez, pero los sueños de cambio, se agotan y entonces en lo que nos concentramos es, en intentar rearmar un rompecabezas que tiene fichas ya ¡absolutamente perdidas!, ¿no?. Sí, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la altillanura, todo lo que ha ocurrido en esa zona del país en términos de violencia ¡tan desconocido! ¿no? por tantos actores, ¡tan invisibilizado! el rol de las grandes empresas acumuladores de tierra en la altillanura ¿qué ha pasado con la altillanura en términos de construcción de paz? ¿cómo quedaron los PATRR [DUD:1:40:03] que podrían caber en esa subregión de altillanura, proponiendo sí, visiones territoriales distintas, pero ¿y la posibilidad de implementar excepciones territoriales? que pasarían por o detener, o reformular, o modificar, visiones de explotación en la altillanura y eso en este momento no está pasando en el proceso de implementación de la paz.

ENT: Y Johana, ya para finalizar, si uno vuelca la pregunta, pensar en recomendaciones uno diría ¡uff!, pues hay un montón, pero ¿cuáles son como los pilares básicos en función de garantías de no repetición?

TEST: Sí [audio: ujum], muy importante eso. [risa]

ENT: [risa]

TEST: [risa] ¡Ivón! [risa] Mira yo, yo creo que, o sea, yo no podría pensar en que, ni siquiera los que tienen que hacer las recomendaciones puedan hacer un listado ¡exhaustivo! de recomendaciones, creo que podría, por un lado, pensarse en una suerte de, establecer una como, tipos de criterios de lo que implicaría tomar medidas para garantizar la no repetición, por parte de actores encargados de implementar esas garantías, ¿no?, porque son a ¡todo nivel!, no es solamente que vengan de los organismos del sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación. Entonces, primero, como criteriar ¿qué es lo que debería garantizar esta cartera que se encarga de estos asuntos para que, estos asuntos que han acontecido en el marco del conflicto, no vuelvan a pasar? o ¿qué tendría que garantizar esta cartera y estás autoridades para que estás cosas asociadas para que otro tipo de conflictividades nutridas en el marco del conflicto no vuelvan a pasar, entonces, primero, crear como una forma de _test, _o de lista de criterios ¿no?, no me viene a la cabeza cómo o cuales, pero sí pienso que, para que estas garantías puedan ser dinámicas, porque la no repetición tiene que ser dinámicas, cuando se estanca únicamente en un listado de, de un _checklist_, eso puede perder vigencia al año o a los 2 años siguientes, entonces, cómo se actualiza que esas garantías sean una lógica permanente en las instituciones y en la sociedad ¿no?, entonces, creo que, ahí habría que pensarse en un instrumento que les permita actualizarse y que nos permita a todos tener la consciencia, a todos y a todas, de tener la consciencia de que las garantías de no repetición no es el exacto cumplimiento estático de unas recomendaciones sino que van a requerir una tarea de años, para que justamente esto, no vuelva a repetirse, algunas de esas garantías de no repetición serán unas ordenes de tipo complejo, ¿no?, como "desmonte del paramilitarismo, ¿cómo lo voy a desmontar mi amigo? ¿no?, ¿cómo va a verificar que efectivamente el paramilitarismo este desmontado?, pues, qué se yo, unos pasos, una verificación de, de indicadores, bueno, lo que quiero plantearte es, hay que, tomar, como de esos abrevaderos que ya se han creado en el país para observar circunstancias complejas e ir transitando hacia ¡cambios! en esas situaciones complejas, entonces, sí, lo primero que te diría es las garantías tendrían o que estar atravesadas por unos criterios o por unas sugerencias o por, una suerte de cosas que les permitan a ellas constantemente estarse actualizando y revisándose ¿no? y las instituciones encargadas de implementarlas permanentemente, sería divino, que las instituciones encargadas de implementarlas se pensarán que en lo sucesivo esto no es una cosa excepcional sino que, su funcionamiento tiene

que estar dirigido a que la historia que hemos vivido ¡no vuelva a ocurrir!, no acciones aisladas, sino que, sea transversal a la obligación misional que el conflicto no vuelva a ocurrir y eso pasaría también por entender que el conflicto fue alimentado desde diferentes frentes ¿no? entonces ¡los típicamente armados!, con los actores, montados ¿no?, desde grupos, distintos grupos de actores armados, pero, que fue alimentado también, por visiones territoriales que se querían implantar, por, una dinámica de derrotamiento de las visiones contrapuestas a esas visiones que se querían implementar y entonces, eso en términos de construir ciudadanía qué implica ¿no? el rol por ejemplo, de las universidades en la garantías de no repetición, de las universidades locales, de las instituciones educativas ¡públicas!, locales, de la magis, ¡del magisterio! ¿sí?, de los jueces, de, sí, las entidades de gobierno ¡también!, pero, este otro cumulo de actores que al final integramos, pues, ¡que hacemos estado!, porque yo soy de la tesis de que el estado no son solamente las instituciones sino la ciudadanía que también está dispuesta a generar una cultura de control sobre las instituciones ¿no?, entonces, creo que habría que pensarse, garantías, eh, digamos, esta reflexión de las garantías hacia varios frentes, esta palabra es muy bélica, pero no se me ocurre otra "frentes" ¿no?, de donde se nutrió el conflicto armado, ¡y!, desde mi experiencia, lo que yo te diría es, tendría que haber unas garantías dirigidas, sí, a esas acciones del conflicto y que normalmente en las acciones de conflicto, entonces, las vulneraciones se calificaron en términos a derechos civiles y políticos y entonces, cómo asegurar que, por ejemplo, los derechos de la participación, los derechos de la ciudadanía, los derechos de la personalidad jurídica, en un país como estos, no vuelvan a atentarse de la manera en que lo han hecho, ni siquiera instrumentalizar las instituciones para, para, eh, obstaculizar el ejercicio de ese tipo de derechos, pero, por el otro lado, también, cómo desde el conflicto, entonces, eh, las desigualdades se profundizaron y una forma de garantizar que un conflicto como estos no va a volver a darse es, contrarrestando la desigualdad que tiene el país ¡y cuáles son! las cosas que tendría que taclearse de la desigualdad en una suerte de ¡priorización de tareas!, ¿sí?, yo sé que para muchos esto puede parecer "no, nos están pidiendo que hagamos ¡política pública ahora de todo!", eh, pero sí creo que hay que hacer consciencia que la desigualdad estuvo en el corazón del conflicto y que, fue lo que más se profundizó, durante y después del conflicto, entonces, hay que hacer, hay que buscar la manera de generar la consciencia de que, las cosas que nos permitieron llegar al día de hoy como una sociedad que, no tuvo que pasar por una dictadura para enfrentar toda esta violencia ¡no son saludables!, que tal vez es necesario cambiar muchas de esas instituciones para que justamente esto ¡no vuelva a pasar!; instituciones efectivamente, que, que logran hacer una mayor realización de sus principios constitucionales ¿no?, eh, que logran plantearse, por ejemplo, en lo ambiental, yo le cambiaría lo ambiental, la visión no sinérgica y acumulativa de los

impactos causados por los proyectos de tipo extractivo ¿por qué?, porque eso es lo que ha permitido que los territorios y los ecosistemas no sean considerados sistemas de vida, sean puestos ahí, como en un polígono normal y entonces solamente se examina lo que pasa en ese polígono, y esa visión de llevarlo, la reflexión a lo ¡holístico! es algo que necesitamos en términos ambientales, decentropolizar ¡agg!, hay una palabra pero en este momento ¡dejar de poner en el centro en el hombre! en el ser humano. La paz pasa por reconocer que, como las personas naturales fueron víctimas del conflicto, sí, las personas jurídicas también, el territorio fue la primera víctima del conflicto y cómo hacemos que la garantía de repetición ¡de no repetición! ¡al territorio!, tenga una respuesta institucional, sacar el paradigma de lo antropológico y pasarlo, no sé si a lo biocultural, como esta tan de moda hoy o a otro tipo de paradigma, pero, hay que pasar por hacerse las preguntas de cómo estás instituciones que hoy tenemos nos permitieron llegar hasta acá, si hay que revisar las instituciones en un proceso ¡exhaustivo! institucional pues hay que hacerlo, la reforma a la justicia ¡ish!, creo que eso sería una enorme garantía de no repetición, una reforma a la justicia, no que reduce el sistema de justicia para que no haya análisis de la judicatura sobre el poder ejecutivo, no [risa], hay que pensarse en una manera en la que efectivamente la sed de justicia tiene una respuesta en este país y no es solamente la justicia penal, que la justicia ¡sirva pa algo!, la jurisdicción agraria, este debate de, jueces que entiendan lo rural ¡1920!, casi 100 años de retraso tenemos con esa, frente a esa demanda de la sociedad civil, ¿sí?, tenemos ¡hay una sed de justicia!. Entonces, lo que yo creo en términos de garantías de no repetición es, hay que examinar, casi en una ¡radiografía! qué fue lo que permitió que este conflicto se escalara de esta manera, en medio de una "democracia" y, al diagnosticar eso, desde todos los ámbitos en los que se nutrió ese conflicto, o sea, lo típicamente militar o lo no típicamente militar pero que estaba ¡ahí!, nutriéndolo, permitiéndole ser lo que era, pues, empezar a identificar lo prioritario y proponer cambios, si eso pasa por la estructura del estado ¡genial!, si eso pasa por pedagogía de la paz ¡fantástico!, porque lo que sí creo es, estoy, digamos, yo estoy sorprendida de la capacidad que tiene la violencia en Colombia para rencaucharse, para sobrevivir, eso es lo que estamos viendo ahorita, la violencia en Colombia sobrevive ¡no importa que estemos en esto! y ahí sí hay que, yo siento ENTque, eso ¡excede ese mandato que ustedes tienen de 2 años, tal vez parte de impedir de que hayan adecuadas garantías de no repetición es dar un mandato tan corto para hacer una revisión como esas, ¿no?, no solo en clave de esclarecimiento sino y ¿cómo vamos a transformar esta vaina? porque podemos quedarnos con un gran ejercicio de esclarecimiento, que aporte ¿sí?, que contribuya, que incluso supere lo que logro la Comisión de Verdad de Sudáfrica, ¿no?, que, es considerada una de las que hizo un ejercicio más destacable en términos de esclarecimiento institucional extrajudicial, pero ¿y sí, eso no pasa por esas propuestas de garantías de no repetición?, desde alguien que ha entendido la verdad más allá

de lo probado, digamos, de esa manera tan técnica, pero que, incluso, desconoce los otros tipos de verdad que tendrían que ser reconocidos, entonces, creo que esa labor que ustedes tienen a cargo, pues, esta llamada al fracaso, no por qué no sea importante esclarecer, sino por la capacidad de impacto que tendrá para transformar, sí, no, no, esta última afirmación no es, irrespetuosa con la gestión de la comisión, sino que es crítica con lo que los actores que suscribieron el acuerdo consideraron podía y tenía que hacer esta comisión ¡y lo que! les permitían hacer ¿no?, en términos materiales de condiciones, tiempo, recursos.

ENT: Johana muchísimas gracias ¿quisieras agregar algo más?

TEST: No, perdón por las [risas]

ENT: No, mil gracias.